

Convergencia partidaria y dinámica de la competencia electoral. El caso de México (1976-2012)

Steven Johansson Mondragón

Grado: Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Adscripción: Universidad Iberoamericana (campus Santa Fe), departamento de Ciencias Sociales y Políticas.

Correo electrónico: sjmondr@yahoo.com.mx

Convergencia partidaria y dinámica de la competencia electoral. El caso de México (1976-2012)

Steven Johansson M.

INTRODUCCIÓN

Desde las décadas de 1950-1960, una serie de trabajos han advertido, en las sociedades desarrolladas de Europa occidental, el declive marcado de los “conflictos intelectuales intensos entre los grupos representantes de valores diferentes” (Lipset, 1968: 357). A finales de la década de 1970, John Clayton Thomas acuña el término de “*policy convergence*” y busca validar empíricamente la “hipótesis de la convergencia”. El autor encuentra que, en cinco de los seis países que estudia (Austria, Francia, Gran Bretaña, Italia y Alemania), las diferencias programáticas han declinado uniformemente entre los años sesenta y setenta¹ (1980: 356).

En México, los escasos trabajos que han buscado comparar la oferta programática de los partidos políticos han llegado a la conclusión de que, si bien existen similitudes entre los programas económicos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), no se observa, en el caso mexicano, la tendencia a la reducción del grado de polarización ideológica que caracteriza a los sistemas políticos contemporáneos (Prud’homme, 1998: 88). En un trabajo reciente, el análisis de las plataformas electorales de los tres principales partidos políticos mexicanos en un periodo relativamente largo (1976-2006) me ha hecho llegar, sin embargo, a una conclusión diferente. Partiendo de la ubicación de las posiciones de los partidos en cinco temas de política económica (propiedad estatal, política fiscal,

¹ La única excepción es Estados Unidos. Para un recuento de las investigaciones más recientes que han buscado probar la hipótesis de la convergencia, se puede consultar a Caul y Gray (2002). La hipótesis de la convergencia ha sido criticada por autores que sostienen la tesis contraria, la “hipótesis de la influencia partidaria”, para la cual el signo del partido en el gobierno tiene una influencia determinante sobre las políticas públicas que el partido va a promover. Schmidt (1996) ofrece una revisión de los principales trabajos que se han propuesto dar validez a esta última hipótesis.

apertura comercial, inversión extranjera directa y seguridad social), operativizados bajo la forma de escalas izquierda-derecha, demuestro que la distancia ideológica que separa a los principales partidos políticos mexicanos se ha reducido en el transcurso de las últimas tres décadas, al tiempo que el conjunto de los partidos se ha desplazado hacia la derecha (Johansson, 2012: 77).

La convergencia ideológico-programática de los partidos políticos ha sido explicada a partir de diversas teorías. Algunas vinculan el fenómeno con los cambios en la estructura social (y con el creciente predominio de las clases medias) (Lipset, 1968), otras a los cambios en la economía internacional (Offe y Ronge, 1982; Przeworski y Wallerstein, 1988; Sassoon, 1997), y otras más a las transformaciones recientes de las organizaciones partidarias.

En esta ponencia, me propongo evaluar la pertinencia, para dar cuenta del caso mexicano, de la explicación que vincula la *policy convergence* con la dinámica de la competencia electoral y los cambios organizativos que ésta ha provocado en los partidos políticos. Para algunos teóricos, en efecto, la transformación de los partidos de organizaciones de clase en partidos “atrapa-todo” (Kirchheimer, 1980) o incluso, en otra formulación teórica, partidos-cartel (Mair y Katz, 1997), habría conducido a la desaparición de la identidad de estas organizaciones y a una creciente convergencia ideológico-programática. Tras un rápido recuento, en una primera sección, del proceso que condujo a un sistema de partidos crecientemente competitivo, analizo los cambios organizativos de los partidos políticos mexicanos a la luz de las categorías de partido atrapa-todo (segunda sección) y de partido cártel (tercera sección), operativizadas a través de algunos criterios observables.

DINÁMICA DE LA COMPETENCIA ELECTORAL E INTEGRACIÓN DE LAS OPOSICIONES

En el transcurso de las décadas de 1980 y 1990, las oposiciones al PRI experimentan un proceso de integración al sistema político, en gran medida como resultado de las sucesivas reformas político-electorales promovidas desde principios de los años setenta, y que desembocan, sobre todo a partir de 1997, en elecciones cada vez más competitivas. Desde finales de la década de 1970, y más marcadamente durante la de 1980, el PRI empieza a perder su hegemonía, mientras que las oposiciones empiezan a obtener resultados cada vez más favorables (cuadro 1).

Cuadro 1. Resultados electorales (1976-1988)
Porcentajes de la votación total
Elecciones para diputados federales

	PRI	PAN	Izquierda independiente*	Otros
1976	80	8.4	—	5.4
1979	69.7	10.7	4.8	8.5
1982	69.2	17.5	4.3	7.3
1985	64.8	15.5	6	8.7
1988	51.2	18	29.4	1.2

* PCM (1976 y 1979), PSUM (1982), PMS, PMT y PRT (1985), PRT y FDN (1988)

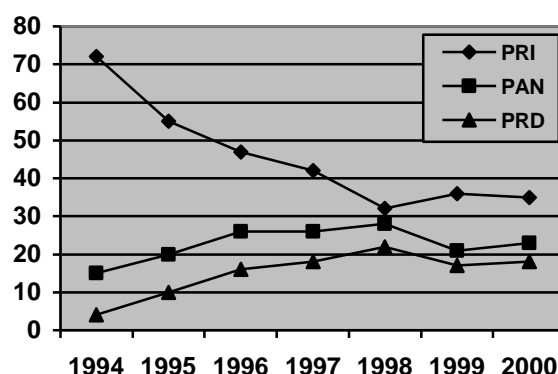
Fuente: Borjas (2003, T1).

Las elecciones de 1988 constituyen, sin duda, un primer “parteaguas de la historia electoral de México” (Rodríguez Araujo, 1998: 181). Ese año, como apunta Octavio Rodríguez Araujo, se llevan a cabo las elecciones mas competidas (hasta entonces) de la “historia moderna de México”, que muestran que el predominio del PRI deja de ser indiscutible (Rodríguez Araujo, 1996: 9). De acuerdo con las cifras oficiales, Cuauhtémoc Cárdenas, candidato del Frente Democrático Nacional, obtiene 31.1% de los votos, el PAN incrementa ligeramente su votación, y el PRI obtiene el porcentaje de votos más bajo de su historia (50.3%) (Borjas, 2003, T1: 217).

Las elecciones federales de 1997 marcan un paso no menos importante en la transición hacia un sistema electoral genuinamente competitivo. Las reformas electorales de 1993 y de 1996, constituyen, sin duda, un factor determinante en este avance, al reducir significativamente la desigualdad en las condiciones económicas de la competencia² (ver gráfica 1). Ambas reformas se traducen en un importante aumento de la competitividad electoral de los partidos de oposición. En las elecciones federales de 1997, el PRI pierde casi 10 puntos porcentuales de votación con respecto a 1994 (pasa de 48.7 a 39.1%), mientras que el Acción Nacional, y sobre todo el Partido de la Revolución Democrática (PRD), incrementan significativamente la suya (el primero pasa de 24.9 a 26.6% y el segundo de 16.2 a 25.6%) (cuadro 2).

² La primera fija límites a las aportaciones privadas, mientras que la segunda hace prevalecer, por ley, el financiamiento público sobre el privado e incrementa sensiblemente el monto de dicho financiamiento. La reforma de 1996 —cabe destacar— es una respuesta a las condiciones de “extraordinaria desigualdad” documentadas por el Instituto Federal Electoral en las elecciones presidenciales de 1994, en las que el PRI concentra el 78% del gasto electoral total (Lujambio, 2003: 382).

Gráfica 1. Participación de los tres principales partidos políticos en el financiamiento total (público y privado), 1994-2000
Porcentaje de la participación total



Fuente: Lujambio, 2003: 384

La creciente competitividad del sistema de partidos es confirmada en las elecciones de 2000, en las que triunfa el candidato del PAN a la elección presidencial, y en las de 2006, en las que el PRI obtiene una votación inferior (tanto en las elecciones para presidente como en las elecciones para diputados federales) a las del PAN y del PRD (Cuadro 2).

Cuadro 2. Resultados electorales PRI, PAN, PRD (1991-2006)
Porcentajes de la votación total
Elecciones para diputados federales

	PRI	PAN	PRD
1991	61.4	17.7	8.4
1994	48.7	24.9	16.2
1997	39.1	26.6	25.6
2000	37.7	39.1*	19.1**
2003	36.7	30.7	17.6
2006	28.2***	33.3	28.9****

* Alianza por el Cambio (PAN-PVEM)

** Alianza por México (PRD, PT, PAS, Convergencia, PSN)

*** Coalición Alianza por México (PRI, PVEM)

**** Alianza por el Bien de Todos (PRD, Convergencia, PT)

Fuente: Borjas (2003, T1 y 2) para las cifras de 1991 a 2003. IFE (www.ife.org.mx) para las cifras de 2006.

¿Qué consecuencias ha tenido este incremento de la competitividad del sistema de partidos sobre los partidos a nivel organizativo? Los tres principales partidos políticos mexicanos han experimentado, en diferentes momentos de su historia, pero de manera más marcada durante las últimas cuatro décadas, profundas transformaciones, que parecen guardar una estrecha relación con la creciente competitividad del sistema. ¿Pueden los modelos del partido “atrapa-todo” y del “partido cartel” ser de alguna utilidad para caracterizar dichos cambios?

PRI, PAN Y PRD: ¿PARTIDOS “ATRAPA-TODO”?

Para Kirchheimer, el partido atrapa-todo ya no dirige, como el antiguo partido “de integración” (o partido de masas), su atención hacia una clase o un sector particular de la población, sino al “electorado”, a la “clientela electoral que es potencialmente toda la población” (1980: 331, 337). El autor, que centra su análisis en las condiciones sociales que permitieron la emergencia de este nuevo tipo de partido,³ no presta demasiada atención a la descripción de los rasgos organizativos del partido atrapa-todo. Es posible, sin embargo, extraer del texto de Kirchheimer las siguientes características (*ibíd.*: 337-338):

- (1) la primacía absoluta de las “consideraciones tácticas a corto plazo”, en detrimento de los fines sociales más comprensivos;
- (2) la desideologización;
- (3) llamados hechos a casi todos los grupos sociales;
- (4) el “fortalecimiento de los políticos situados en la cumbre del partido” y la “desvalorización del papel del miembro individual”;
- (5) la creciente relación con los grupos de interés.

Mair y Katz destacan un rasgo más de este tipo de partido: una membresía heterogénea, abierta a todos los grupos sociales. De este conjunto de características, algunas parecen requerir de una investigación minuciosa, fuera del alcance de este trabajo (la primacía de las consideraciones tácticas a corto plazo, el fortalecimiento de

³ Para Kirchheimer, lo que determina la emergencia del *catch-all party* es la transformación de la estructura social: el fin de la “época de las diferencias de clase más profundas” lleva al partido “de integración” (es decir, al partido de masas), “nacido en una época de diferencias de clase más profundas” a una adaptación que lo convierte en partido atrapa-todo (1980: 333, 331).

los políticos situados en la cumbre del partido, la creciente relación con los grupos de interés). La desideologización, por otro lado, debe ser descartada por constituir la variable dependiente de este trabajo. Me enfoco, por consiguiente, en este apartado, en el análisis de los llamados hechos por los partidos a los distintos grupos sociales y, en menor medida, en el de la membresía, evaluada a través del único (y, por cierto, poco confiable) indicador disponible: el número de afiliados reportado por los propios partidos.

El PRI es concebido, en sus inicios (con el nombre de Partido Nacional Revolucionario), como una organización de masas (Garrido, 1986: 175), asumiéndose como el partido de las “clases obreras y campesinas” (PRI, 1991: 15). Pero, aunque logra incorporar al partido a “miles de campesinos, de empleados públicos y de trabajadores”, carece, por lo menos hasta mediados de la década de 1930, de una “base social sólida” (Garrido, 1986: 123) y no es sino hasta la presidencia de Cárdenas que el partido se transforma en una auténtica organización de masas. El número de miembros pasa de alrededor de un millón en 1934⁴ a poco más de tres millones al final de la primera mitad del sexenio cardenista (*ibíd.*: 293-5).

Con la transformación del partido, en 1938, en Partido de la Revolución Mexicana (PRM), Cárdenas promueve, al lado de la estructura territorial del partido, una estructura indirecta formada por cuatro sectores (campesino, obrero, popular y militar), que le permite organizar a la “casi totalidad de las organizaciones populares”: las ligas campesinas (afiliadas a la Confederación Nacional Campesina), los sindicatos obreros (afiliados a la Confederación de Trabajadores de México y a otras centrales) y los sindicatos de empleados públicos (afiliados a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado) (*ibíd.*: 384).

Cárdenas presenta la creación del PRM como la formación de un partido “de clase”, el “partido de los trabajadores”, aunque también dice aspirar a representar a las clases medias populares, que sufren también “las consecuencias de los sistemas de explotación” y tienen, por lo mismo, “afinidad de intereses con los trabajadores manuales” (*ibíd.*: 305-6). En 1938, gracias a la nueva estructura indirecta del partido, el número de afiliados aumenta notablemente. La dirección nacional estima contar con 4 millones 305 mil afiliados, de los cuales 2 millones 500 mil (es decir el 58%)

⁴ En 1934, el Comité Ejecutivo Nacional del partido estima que el número de afiliados con credencial es de 865 mil y que el número real es probablemente mucho mayor. De acuerdo con el Departamento de Estado norteamericano, el PNR cuenta ese año con alrededor de 1 millón 300 mil miembros individuales (Garrido, 1996: 210).

pertenecen al sector campesino, 1 millón 250 mil (29%) al obrero y 500 mil (11.6%) al popular⁵ (*ibíd.*: 328).

Si bien la estructura sectorial del partido permite, en un principio, cierta participación de obreros y campesinos en el proceso de nominación de candidatos y, a través de los líderes pertenecientes a los sectores, en el Congreso, durante las siguientes décadas ésta tiende a ser usada más como un instrumento de control que como uno de participación. Como apunta Arnaldo Córdova, la organización sectorial del partido resultó ser “el mejor modo para excluir a las masas de la política” y para controlarlas⁶ (1998: 172).

Tras el relevo de Cárdenas, el PRM empieza a perder su carácter de organización de clase. El sector popular, reorganizado con la creación de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, experimenta un fuerte crecimiento que lo sitúa en el segundo lugar, detrás del sector campesino y por delante del obrero (Garrido, 1986: 463), limitando considerablemente la influencia de los dirigentes obreros y campesinos (*ibíd.*: 417). Los nuevos dirigentes del sector popular, “surgidos en su mayoría de las capas medias de la población”, se apoderan progresivamente de los cargos de dirección del partido (*ibíd.*: 405). Esta transformación se refleja en los documentos básicos de 1950 que reconocen, por primera vez, la importancia de una clase media conformada por agricultores, industriales y comerciantes en pequeño, artesanos, cooperativistas, profesionales y burócratas. A principios de la década de 1970, el partido hace énfasis en su carácter pluriclasista. “Es –dice en sus documentos de 1972– un partido heterogéneo en su composición, de clases y no de clase” (PRI, 1972: 8).⁷

Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, la presidencia del partido intenta modificar la estructura sectorial, con el objetivo de hacer desaparecer los sectores “corporativos” (obrero, campesino y popular) y convertir al PRI en un “partido

⁵ Aunque el carácter indirecto de la afiliación hacen difícil cuantificar la membresía real del partido, ésta se ha mantenido elevada hasta la fecha. En las elecciones internas de 2002 participaron 3 millones 144 mil 482 miembros del partido (Baena Paz, 2003).

⁶ Durante el gobierno de Ávila Camacho, los mecanismos de control de los líderes sindicales se fortalecen (Garrido, 1996: 462). Miguel Alemán va a reforzar aún más el control sobre las organizaciones sindicales imponiéndoles líderes “charros”, es decir, sustituyendo las directivas independientes por directivas subordinadas a los intereses gubernamentales.

⁷ En 1969, Robert Furtak, afirma que el “amplio espectro que establecen sus objetivos (anticipados por los ideales de la Revolución y manifestados en las declaraciones de principios del partido), así como sus éxitos indiscutibles (aun cuando no favorezcan o benefician a todos los mexicanos por igual en el terreno socioeconómico) y la peculiar estructura de su organización convierten al Partido de la Revolución en un catch-all-party” (1974:107-108).

territorial, de libre afiliación” (Alcocer, 1993: 128). La reforma a los *Estatutos* de 1990 no logra cabalmente ese objetivo, pero sí resta aún más influencia a los sectores, al obligar a la estructura sectorial a “tener representación paritaria, respecto de la estructura territorial del partido, en asambleas, consejos y convenciones” (Arrieta, 2005: 338).

Paradójicamente, en los últimos años, el PRI, a pesar de los esfuerzos por atraer a los sectores medio y alto de la población, ha ido perdiendo apoyo en estos sectores. Mientras que, en 1994, aún concentra un alto porcentaje del voto de los grupos de ingreso “medio” y “alto” (47 por ciento en ambos casos), en 2006 recibe su principal apoyo de los sectores “populares”: logra obtener el 30 por ciento del voto de los electores que ganan menos de 2,000 pesos mensuales, pero este porcentaje decrece fuertemente a medida que aumenta el ingreso, recogiendo tan sólo entre el 14 y el 16 por ciento del voto de los dos grupos con ingresos más elevados (por encima de 6,500 pesos).⁸

El PAN, por su parte, surge como un “partido de cuadros” (Loaeza, 1999: 160), como una “organización de ciudadanos con un riguroso proceso de adhesión a título individual y dirigida por un núcleo relativamente pequeño de personalidades” (Reveles, 2003: 38). El partido se organiza, de este modo, “con base en relaciones personales”, y de una manera altamente selectiva: la solicitud de admisión –afirma Loaeza– “tenía que ser apoyada por dos socios activos” (Loaeza, 1999: 151-152). Aunque más tarde, al “desconfesionalizarse”, el partido se abre a otras categorías sociales (artesanos, campesinos) (*ibíd.*: 236), su composición social inicial es bastante homogénea: es, como dice Loaeza, un partido “de corazón universitario y profesionista” (*ibíd.*: 153).

En sus inicios, y durante sus primeras décadas de vida, el PAN no busca primordialmente el poder, sino la difusión de su ideología y la educación política de la ciudadanía (Reveles, 2003: 42). El partido, sin embargo, va a ir acordando, sobre todo a partir de finales de la década de 1970, una importancia cada vez mayor a los procesos electorales, acabando por relegar a un “segundo plano la labor de adoctrinamiento cívico, característica fundamental durante varias décadas” (*ibíd.*: 108).

⁸ Según las encuestas de salida del diario *Reforma*, publicadas el 22 de agosto de 1994 y el 3 de julio de 2006, el PRI concentró en 1994 el 51% de los votos del grupo de electores de ingreso “bajo”, y 47% de los de los grupos de ingreso “medio” y “alto”, mientras que, en 2006, recogió el 30% de los votos del segmento con más bajos ingresos (menos de 2,000 pesos), el 24% de los del segmento con ingresos entre 2,000 y 3,999, el 21% de los del segmento con ingresos entre 4,000 y 6,499, el 16% de los del segmento con ingresos entre 6500 y 9,199 y el 14% de los del segmento con ingresos superiores a 9,200 pesos.

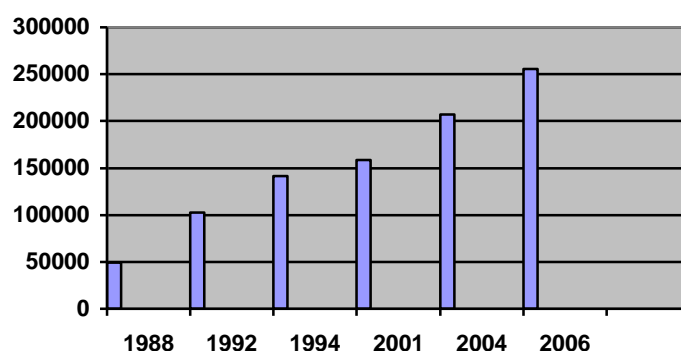
Para transformarse en una fuerza electoralmente competitiva el partido busca transitar de una estructura de partido de cuadros a una de partido “de masas”. Así, a principios de 1980, Abel Vicencio Tovar, presidente del PAN, anuncia ante los consejeros nacionales: “Somos un partido que ha dejado de ser de cuadros para pasar a ser uno de masas”, no en un sentido cuantitativo, sino por el hecho de que la organización se ha abierto a la militancia de “ciudadanos sin condiciones de ubicación especial (sic), en la escala socioeconómica y en la escala cultural, para cuyo ingreso y militancia no se exigen más requisitos que los mínimos, de asimilación y lealtad” (*ibíd.*: 115).

En realidad, lo que Vicencio Tovar proyecta no es un partido de masas, sino un partido atrapa-todo. El partido de masas se caracteriza, en efecto, por la homogeneidad de su base social y por buscar el apoyo de segmentos específicos del electorado. Como apuntan Mair y Katz, los líderes de los partidos tradicionales, al intentar responder al desafío del partido y de la democracia de masas, tienden a adoptar la forma, pero no el *ethos*, del partido de masas. No restringen sus llamados a clases específicas, sino que buscan el apoyo de “todas las clases” (1997: 101).

Como resultado de esta apertura en el reclutamiento a diferentes categorías socioeconómicas, durante las décadas de 1980, 1990 y 2000, el PAN incrementa en forma espectacular el número de sus afiliados. El número de miembros “activos”⁹ se duplica entre 1988 y 1992 (pasando de 49 300 a 102 700) y vuelve a duplicarse entre 1992 y 2004, año en el que cuenta con 206 891 miembros activos (llegando, en 2006, a 256 554), con lo que, en el espacio de menos de 20 años, el partido quintuplica el número de sus miembros “activos” (ver gráfica 2).

⁹ Los Estatutos del PAN distinguen entre miembros “activos”, que participan “en forma permanente y disciplinada en la realización de los objetivos del partido” (artículo 8) y miembros “adherentes”, que contribuyen a la realización de estos objetivos (artículo 9). Los aspirantes a ser miembros activos deben acreditar haber sido miembros adherentes “por un plazo de seis meses” (Estatutos, reformados por la XV Asamblea Nacional Extraordinaria).

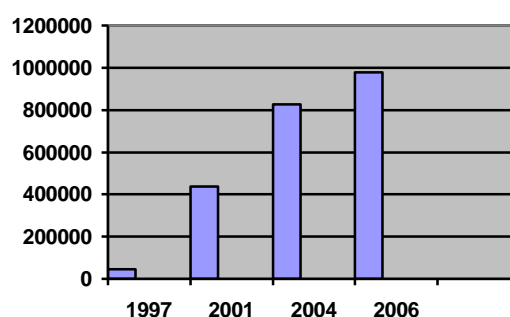
Gráfica 2. Miembros activos de Acción Nacional (1988-2006)



Fuente: *Voz y Voto* (1996) para cifras de 1988 a 1994; Borjas (2003) para cifras de 2001; Reveles (2005) para cifras de 2004; PAN para cifras de 2006 y de 2013.

En cuanto a los miembros “adherentes”, su crecimiento también ha sido muy alto. Éstos pasan de 46, 165 en 1997 (año en que son considerados por primera vez en el padrón) a 437, 801 en 2001, 825, 574 en 2004 y a 978, 581 en 2006 (ver gráfica 3). El número de miembros “adherentes” se multiplica por 10 en cuatro años (entre 1997 y 2001) y se vuelve a duplicar entre 2001 y 2006. El número total de miembros del PAN (la suma de los miembros activos y de los adherentes) pasa de menos de 200 mil en 1997 a 596 155 en 2001, 1 millón 32 mil 465 en 2004 y a 1 millón 234 mil 135 en 2006. Este crecimiento del número de miembros del PAN es tanto más notable cuanto la afiliación a los partidos ha tendido a disminuir durante las últimas décadas en la mayoría de los regímenes democráticos (Ware, 2004: 123-5).

Gráfica 3. Miembros adherentes de Acción Nacional (1997-2006)



Fuente: Reveles (2002:174-5) para cifras de 1997 y 2001; Reveles (2005) para cifras de 2004 y PAN (www.pan.org.mx) para cifras de 2006 y 2013.

El electorado del PAN experimenta una diversificación similar. En 1994, el partido recoge el 27 por ciento de los votos del grupo de votantes con ingreso “bajo” y el 36 y el 47 por ciento de los de los grupos con ingreso “medio” y “alto”, respectivamente. En 2006, disputa a los otros dos grandes partidos la representación de los segmentos con ingresos más bajos del electorado: obtiene el 31 por ciento de los votos del segmento con ingresos inferiores a 2,000 pesos (el PRI obtiene el 30 por ciento y el PRD el 34 por ciento de los votos de este segmento) y el 32 por ciento de los del segmento con ingresos entre 2,000 y 3,999 pesos (contra 24 por ciento obtenidos por el PRI y 39 por ciento obtenidos por el PRD)¹⁰.

Los promotores del Partido de la Revolución Democrática quisieron crear el “partido de masas” que la izquierda nunca había tenido (Gilly, 1988: 9). Creyeron que por fin se estaban dando las condiciones para la creación de un partido con fuertes vínculos con las organizaciones y los movimientos sociales y con la capacidad de articularlos políticamente. El proyecto cardenista –se pensaba– podría superar la tendencia histórica de la izquierda hacia los “partidos cupulares” y construir una base de masas a través de la alianza con las clases populares antagonizadas (Combes, 2004: 210).

De hecho, el partido nace “profundamente intrincado con los movimientos sociales y de manera más general con las organizaciones contestatarias” (*ibíd.*: 9). La presencia, entre los actores que participan en el proceso fundacional¹¹, de un número importante de organizaciones y movimientos sociales, parece dar al PRD, en sus inicios un “carácter dual de partido-movimiento”, que actúa tanto en el terreno institucional como en el social, y que no limita su acción a la participación electoral, sino que se plantea otros caminos para la consecución de sus fines, como la “movilización popular” (Borjas, 2003, T1: 279-80).

Aunque el partido rechaza la propuesta de una estructura “dual”, territorial y sectorial, hecha por una corriente dentro del Comité Nacional Promotor (Combes, 2004: 214), y opta por una estructura directa, basada en una afiliación “estrictamente individual” (artículo 10) y en comités de base territoriales, los *Estatutos* aprobados en 1990 también permiten la creación de comités “por actividad”, “en función de la

¹⁰ Encuestas de salida del diario *Reforma*, publicadas el 22 de agosto de 1994 y el 3 de julio de 2006.

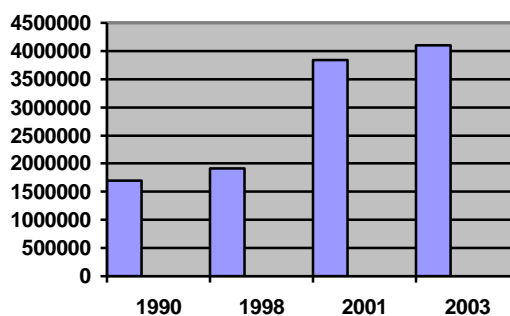
¹¹ Las organizaciones que participan en el proceso fundacional del PRD son: Asamblea de Barrios, Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, Consejo Nacional Cardenista, Convergencia Democrática, Consejo Nacional Obrero y Campesino de México, Grupo Poliforum, Movimiento al Socialismo, Organización Revolucionaria Punto Crítico, OIR-Línea de Masas, Partido Verde y Partido Liberal (Borjas, 2003, T1: 279).

ocupación productiva, creativa, laboral, escolar o profesional de los afiliados; o en función de la dedicación social del afiliado” (artículo 75) (PRD, 1991: 43, 74). Es decir, permiten a los afiliados miembros de una organización o de un movimiento social crear uno o varios comités de base, con lo que garantizan una estrecha vinculación entre el partido y los movimientos y organizaciones.

Esta vinculación es reforzada por el origen de los dirigentes y militantes del partido. Hélène Combes estima que, hacia 2001, 39 por ciento de los dirigentes perredistas provienen de “organizaciones no partidarias”, es decir, de movimientos sociales, organizaciones sociales, sindicatos u organizaciones no-gubernamentales, lo que le permite afirmar que éstas últimas constituyen la “primera fuente de reclutamiento del partido”¹² (2004: 236).

El PRD, en suma, nace con la ambición de ser un partido “de masas” y un “instrumento de lucha social”, y de orientar su trabajo “hacia las bases” (Borjas, 2003, T1: 284). En concordancia con esta visión, el partido ha buscado incrementar el número de sus afiliados. El número de miembros pasa así de 1.7 millones en 1990 a 1 millón 916 mil 549 en 1998, 3 millones 839 mil 928 en 2001 y 4 millones 102 mil 589 en 2003¹³ (ver gráfica 4).

Gráfica 4. Membresía del PRD



Fuente: Borjas (2003, T1 y 2), Reveles (2004).

¹² La autora basa esta estimación en una encuesta realizada durante el VI Congreso Nacional del PRD (abril 2001) entre una parte (17%) de los 1,800 delegados presentes. Para la autora, los delegados no eran “simples militantes” ni “militantes de base”, sino militantes capaces de “movilizar recursos diversos (materiales, simbólicos, partidarios, asociativos...)”, es decir, “dirigentes de primer nivel” (Combes, 2004: 574-5).

¹³ El primer Congreso Nacional del partido (1990) estima la afiliación en 1.7 millones de miembros (Borjas, 2003, T1: 371-2). En 1998, según los datos de la Subsecretaría de Organización del CEN del PRD, la afiliación al partido asciende a 1 millón 916 mil 549 miembros (Borjas, 2003, T2: 238).

El PRD pretende, por otro lado, dirigir sus llamados, no a sectores específicos del electorado, como lo hacen los partidos de masas, sino al conjunto de la población. Un documento emanado de su III Congreso deja clara esta ambición:

El PRD no debe tener la pretensión de representar los intereses sólo de los mexicanos más pobres y marginados. Por el contrario, debemos completar nuestro programa y hacerlo suficientemente claro y realista para que en él se sienta representada la gran mayoría de la población. El PRD, a partir de sus propuestas, debe ser un partido atractivo para los mexicanos más desprotegidos, los campesinos, los indígenas, los obreros, los desempleados, los sin casa, etc., pero también para los compatriotas de la clase media, los pequeños propietarios, los productores agrícolas y los empresarios (grandes y pequeños) (Sánchez, 1999: 145).

El partido otorga, como el PRI y el PAN, un lugar privilegiado a los estratos medios, “de cuya ampliación y constante fortalecimiento –afirma– depende el equilibrio económico y social del país” (PRD, 1995: 46). En los últimos años, se ha incluso abierto al sector empresarial, al que ha otorgado diversas candidaturas a puestos de elección popular¹⁴.

Esta pretensión de abarcar a diversos sectores de la población se ha traducido en una importante diversificación del electorado perredista. En las elecciones para Jefe de Gobierno del Distrito Federal de 1997, el voto por el candidato del PRD se repartió de manera notablemente uniforme entre los diferentes grupos de ingreso (cuadro 3). Lo mismo sucedió, aunque de manera ligeramente menos marcada, en las elecciones para diputados federales de 2006¹⁵.

¹⁴ Desde 1998, el PRD ha otorgado a empresarios algunas candidaturas a los gobiernos estatales. Ese año, otorgó la candidatura a gobernador de Puebla al empresario textil (y ex panista) Ricardo Villa Escalera. En 1999, postuló, en alianza con el PAN, al empresario Antonio Echevarría Domínguez para el gobierno de Nayarit. En años más recientes, destacan las candidaturas de Yedckol Polewsky al gobierno del Estado de México y la de Zeferino Torreblanca al de Guerrero.

¹⁵ De acuerdo con las cifras de la encuesta de salida del diario *Reforma*, Andrés Manuel López Obrador, candidato del PRD, recogió el 34% de los votos del grupo con ingresos menores a 2,000 pesos; el 39% de los votos del grupo con ingresos de entre 2,000 y 3,999 pesos; el 37% de los votos del grupo con ingresos de entre 4,000 y 6,499 pesos; el 36% de los votos del grupo con ingresos de entre 6,500 y 9,199 pesos; y el 30% de los votos del grupo con ingresos superiores a 9,200 pesos..

Cuadro 3. Elecciones para Jefe de Gobierno del Distrito Federal (1997)
Porcentaje de la votación por grupos de ingreso*

	PAN	PRI	PRD
I. Menos de 800 pesos	13	23	51
II. 800 a 1499 pesos	14	23	53
III. 1500 a 2999 pesos	18	18	55
IV. 3000 a 4999 pesos	19	19	54
V. 5000 pesos y más	29	17	50

Fuente: Encuesta de salida del diario *Reforma*, 7 de julio de 1997.

* Los totales no suman 100% por no estar incluidos los otros partidos.

Las consecuencias que tiene la adopción del modelo de partido atrapa-todo sobre las concepciones ideológicas y programáticas de los partidos son claramente expuestas por Kirchheimer. Para abarcar a la mayor parte del electorado, el partido atrapa-todo debe “excluir de sus previsiones los cambios políticos radicales” y concentrarse en cuestiones en las que se toquen objetivos que apenas suscitan oposición en la comunidad, en fines que se sitúan “más allá de los intereses de grupo” (Kirchheimer, 1980: 338, 332). Debe, por lo tanto, “posponer de modo radical los componentes ideológicos del partido”, desideologizarse, esto es, “privar a la ideología de su puesto motor en la fijación de objetivos políticos”¹⁶ (*ibíd.*: 337, 334). La transición hacia este modelo desemboca, como lo subrayan Mair y Katz, en el “desvanecimiento de la especificidad ideológica y/o programática de los partidos”, en un “creciente consenso en materia de políticas públicas” que, a su vez hace desaparecer el incentivo para mantener un electorado específico (1997: 102).

¿HACIA LA CARTELIZACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS MEXICANOS?

La evolución reciente de los tres principales partidos políticos mexicanos parece haberlos conducido no sólo a adoptar, como se ha visto, algunos de los rasgos del modelo de partido atrapa-todo, sino a presentar otros que caracterizan a otro modelo de

¹⁶ Robert Michels observaba ya, en las primeras décadas del siglo XX, que cuando el objetivo principal de la organización es “incorporar al mayor número posible de miembros, toda lucha ideológica (...) ha de ser considerada, por fuerza, como un obstáculo para la realización de sus propósitos”. Para evitar que los posibles simpatizantes se alarmen, el partido rehuye una “política basada sobre principios estrictos” (Michels, 1969, T2: 154).

partido: el partido-cártel. De acuerdo con Mair y Katz, este último se caracteriza por la “interpenetración entre partido y Estado” y por un “patrón de colusión interpartidario” (1997: 108).

Ante el declive de los niveles de participación y de involucramiento en la actividad partidaria, los partidos de las democracias modernas han tenido que buscar sus recursos en otro lado: en el Estado. De este modo, los subsidios estatales constituyen hoy una de las principales fuentes de recursos financieros y materiales de la que disponen los partidos (*ibíd.*: 105). Para los autores, el incremento del financiamiento público observado durante las últimas décadas ha convertido a los partidos en “agencias semi-estatales”, en partes del “aparato del Estado” (*ibíd.*: 106, 105).

Esta estrategia conlleva un riesgo: que los partidos sean dependientes de recursos que se encuentran fuera de su control. Para atenuar ese riesgo, los diferentes partidos, aunque enfrentados en la competencia electoral, tienen un interés común en compartir los recursos del Estado y en “sobrevivir juntos”, “lo que crea las condiciones ideales para la formación de un cártel” (*ibíd.*: 107).

Si el concepto de “interpenetración entre partido y Estado” puede ser fácilmente operativizado (por medio del indicador del financiamiento público), el de “colusión interpartidaria” plantea, en cambio, algunas dificultades. Los autores definen esta última como la “colusión y cooperación entre competidores aparentes”, como “acuerdos que, por definición, requieren del consentimiento y la cooperación de todos, o casi todos, los participantes relevantes” (*ibíd.*: 108) y que tienen por objetivo limitar, administrar la competencia (*ibíd.*: 112). Las “condiciones” que facilitan esta colusión –señalan– son un “elevado nivel de oportunidades para el patrocinio y el control de los partidos” (es decir, para que los partidos controlen la distribución de cargos públicos) y una cultura política marcada por una tradición de cooperación interpartidaria y de negociación (*accomodation*) (*ibíd.*: 108). Como ejemplos de colusión, Mair y Katz mencionan a los principales partidos italianos (incluyendo a veces a los comunistas), que acostumbran repartirse los cargos, y el de los cuatro principales partidos suizos, que se reparten los cargos y se rotan en la presidencia del Consejo Federal.

Una tercera característica del partido-cártel, implícita en el concepto de “participantes relevantes” de la definición anterior, es la condición de partido gobernante. Los autores observan, en efecto, que casi todos los partidos “significativos” (*substantial parties*) pueden ser vistos hoy como “partidos gobernantes” y que muy pocos de estos partidos se encuentran permanentemente excluidos, sobre todo si se

toman en cuenta los gobiernos regionales y otras formas de gobierno “sub-nacional” (*ibíd.*: 107). Los partidos-cártel son, por definición, partidos gobernantes, o por lo menos con vocación a serlo.¹⁷

PRI, PAN y PRD, partidos gobernantes

Los resultados de las elecciones de 1997, confirmados por las elecciones posteriores, han convertido a los tres principales partidos políticos mexicanos en partidos gobernantes: los tres tienen acceso al poder (por lo menos a nivel municipal y estatal) y los tres están en condiciones de acceder al poder a nivel federal. En 2003, el PRI gobierna en 17 Estados, 1,112 municipios (45.4 por ciento del total) y cuenta con 484 diputados locales (47.3 por ciento del total), el PAN gobierna en 8 Estados (y co-gobierna 2 más con el PRD), 369 municipios (15 por ciento del total) y cuenta con 237 diputados locales (23 por ciento del total), y el PRD gobierna en 5 Estados (y co-gobierna 2 más con el PAN), 295 municipios (12 por ciento del total) y cuenta con 166 diputados locales (16 por ciento del total) (Borjas, 2003, T2: 496).

Ahora bien, como observan Mair y Katz, una vez en el poder, los partidos encuentran que los constreñimientos y las demandas del ejercicio del gobierno, así como la necesidad de trabajar con grupos a los que previamente se oponían, los obligan a alcanzar compromisos (1997: 107). Adriana Borjas observa así que, en el caso del PRD, el avance electoral de 1997 permitió acceder al poder a militantes procedentes de la izquierda política y a dirigentes de organizaciones sociales, lo que permitió, “por primera vez” desde la fundación del partido, una “amplia distribución de incentivos” (2003, T2: 166-7).

Por otro lado, como apunta Yemile Mizrahi, “debido a la centralización financiera que existe en México”, los gobiernos de oposición en los Estados se ven en la obligación de mantener una relación cordial con el gobierno federal y de moderar el discurso beligerante usado durante las campañas (1996: 512). La condición de partido gobernante parece tener, pues, un efecto disciplinador sobre las organizaciones

¹⁷ En el plano de la organización interna, el partido-cártel se caracteriza por privilegiar lo que Katz y Mair llaman “partido en el gobierno” (*party in public office*), subordinando a éste las otras dos caras del partido: la burocracia central (*party in central office*) y el partido local (*party on the ground*). Esto se traduce en un aumento de la autonomía y de la influencia de los líderes parlamentarios (Mair y Katz, 2002).

partidarias, obligándolas a moderar tanto sus planteamientos programáticos como sus críticas al gobierno central.

La interpenetración con el Estado

En el caso del PRI, partido surgido del Estado, y que ha sido caracterizado como partido de Estado o *del* Estado, la interpenetración entre el partido y el Estado no requiere de mayor demostración. Dominado, hasta hace poco, por el gobierno, y en particular por el Jefe del Ejecutivo en turno, el PRI nunca funcionó como un partido político, sino como una secretaría de Estado (Centeno, 1997: 52). En el caso del PAN y del PRD, la interpenetración con el Estado se verifica, sobre todo, en la creciente dependencia del financiamiento público, que se acentúa fuertemente durante la década de 1990.

El financiamiento público a los partidos aparece en la mayoría de los países europeos durante las décadas de 1960 a 1980¹⁸ (Ware, 2004: 460). En México, es la reforma electoral de 1977 la que inaugura formalmente el financiamiento público a los partidos, pero éste es realizado a través de la secretaría de Gobernación de manera “esencialmente discrecional” (Lujambio, 2003: 372-3). Las reformas posteriores (1986-1987 y 1989-1990) se encargan de establecer reglas más claras para la determinación de los montos y la distribución de los recursos.¹⁹

En un principio, el PAN se opone al financiamiento público, con el argumento de que éste puede ir en detrimento de la independencia de los partidos políticos. En un mensaje dirigido al Consejo del partido, a finales de 1977, Manuel González Hinojosa, presidente del PAN, observa que la serie de “ayudas de carácter económico a los partidos” puede “producir una dependencia del Estado, totalmente inaceptable para Acción Nacional” (Reveles, 2003: 107). Los promotores del PRD, por su parte, aceptan el financiamiento público, pero consideran que, en aras de garantizar la independencia y la autonomía del partido, éste debe ser sólo complementario (Borjas, 2003, T1: 284).

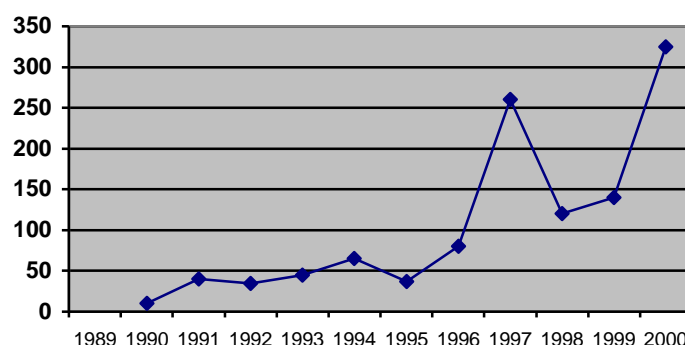
¹⁸ Así, a finales de la década de 1980 existe alguna forma de financiamiento público en 19 democracias liberales, es decir, en “aproximadamente dos terceras partes de las democracias firmemente asentadas” (Ware, 2004: 459). Para Ware, “tres formas de presión”, aparecidas durante la década de 1950, empujaron hacia la introducción del financiamiento público: el descenso generalizado de los ingresos recaudados por las vías privadas tradicionales (incluyendo el pago de cuotas por parte de los afiliados), la aparición de nuevas tecnologías que hacían las campañas más costosas y el temor a que la corrupción minara a los partidos (*ibíd.*: 460).

¹⁹ La reforma de 1986-1987 alude de manera explícita, por primera vez, al “derecho al financiamiento público” de las actividades de los partidos políticos y establece reglas para determinación de los montos y la distribución de los recursos entre los diferentes partidos. La reforma de 1989-1990 se limita a modificar la fórmula de reparto (Lujambio, 2003: 374-375, 378).

Sin embargo, ambos partidos abandonan, al poco tiempo, sus preocupaciones iniciales. El PAN se pronuncia, en octubre de 1988, por aceptar el subsidio (Reveles, 2003: 161), mientras que el PRD, quien considera que el Estado debe financiar a los partidos por su carácter de “entidades de interés público”, propone, en su *Programa* de 1995, que el financiamiento público sea preponderante sobre el financiamiento privado (PRD, 1995: 14).

La reforma electoral “definitiva” de 1995-1996, buscando “dar plena supremacía al financiamiento público sobre el financiamiento privado” (Woldenberg, 2002: 310), aumenta más de tres veces el monto del financiamiento público otorgado a los partidos (Lujambio, 2003: 380). Mientras que en 1989, primer año para el que se cuenta con información pública, el financiamiento público es de 7.29 millones de dólares, en 2000 es de 322 millones, es decir 44 veces más (*ibíd.*: 382). La gráfica que muestra el crecimiento del financiamiento público a los partidos políticos mexicanos es elocuente.

Gráfica 5. Financiamiento público a los partidos políticos (1989-2000)
(millones de dólares estadounidenses)



Fuente: Lujambio (2003: 383).

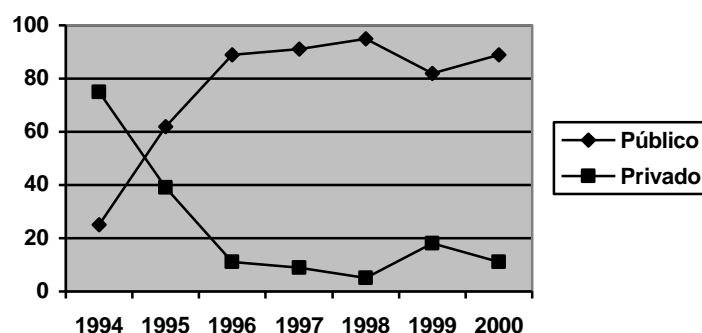
Entre 1994 y 2003, el financiamiento público otorgado a los tres principales partidos políticos mexicanos se multiplica por poco más de seis, pasando de 637.3 millones a 3,932.5 millones (en pesos constantes de 2006). Si el PRI recibe cuatro veces más recursos públicos en 2003 que en 1994, los principales beneficiarios de este incremento son el PAN y el PRD. El primero ve el monto de su financiamiento multiplicarse, entre 1994 y 2003, por 12 (éste pasa de 126.9 a 1,555.5 millones de

pesos), mientras que el segundo ve el suyo multiplicarse por poco más de 8 entre 1994 y 2006 (pasando de 88.4 a 722.7 millones de pesos).²⁰

Al mismo tiempo, el financiamiento privado de militantes y simpatizantes cae de manera importante, aunque la caída expresa en realidad una reducción espectacular de los ingresos privados del PRI, que pasan de 1,187.7 millones en 1994 a 188.7 en 2006, con lo que acusan una disminución del 84%. Entre 1994 y 2006, los ingresos privados del PAN y del PRD se multiplican por tres (los del primero pasan de 127.3 a 397.9 millones de pesos, mientras que los del segundo pasan de 27.6 a 88.5 millones de pesos).²¹

A partir de 1997, el financiamiento público pasa a ser claramente preponderante, como lo muestra la gráfica 6. Mientras que en 1994, éste representa tan sólo el 28.3% de los ingresos totales del PAN, 21.8% de los del PRI y 74.2% de los del PRD, a partir 1996-1997, pasa a representar una parte abrumadora del ingreso total de los partidos (ver cuadro 7).

Gráfica 6. Financiamiento público vs. financiamiento privado (1994-2000)
(porcentaje del financiamiento total)



Fuente: Lujambio (2003: 383).

El cuadro 4 muestra que, si dejamos de lado los años en que hay elección presidencial (2000, 2006) y los años previos a ésta (1999, 2005), años en los que el financiamiento privado aumenta significativamente,²² la proporción del financiamiento

²⁰ Las cifras de 1994 provienen de Giménez-Cacho (2003) y las de 1997 a 2006 de los informes anuales de los partidos difundidos por el IFE (www.ife.org.mx). Todas las cifras están convertidas a pesos de 2006.

²¹ Cálculo personal, a partir de los datos contenidos en los informes anuales de los partidos. Las cifras están convertidas a pesos de 2006.

²² El año 2011 parece excepcional pues, a pesar de ser un año previo a una elección presidencial, el financiamiento público continúa siendo abrumador.

público sobre los ingresos totales de los tres principales partidos oscila entre el 89 y el 98 por ciento. Estos datos exhiben una dependencia abrumadora de los recursos del Estado.

Cuadro 4. Proporción del financiamiento público sobre el ingreso total de PAN, PRI y PRD (1998-2011)
Porcentajes.

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
PAN	90	91	83	93	96	95	91
PRI	92	68	77	95	98	96	93
PRD	96	97	96	97	97	97	89
Promedio	93	85	85	95	97	96	91

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PAN	83	73	94	96	95	97	96
PRI	91	86	97	96	94	95	98
PRD	87	84	64	95	94	96	95
Promedio	87	81	85	96	94	96	96

Fuente: Giménez-Cacho (2003) para datos de 1998 a 2002; IFE (informes anuales de los partidos) para datos de 2003 a 2011.

Si en un principio, los partidos de oposición (PAN y PRD) se opusieron al crecimiento espectacular del financiamiento público otorgado a los partidos,²³ ninguno de los tres principales partidos políticos mexicanos ha vuelto a solicitar la reducción de los montos de dicho financiamiento. Así, el macrofinanciamiento público se ha convertido en uno de los principales determinantes del sistema de partidos mexicano.

¿Un patrón de colusión interpartidaria?

¿Es posible encontrar, en el caso mexicano, algunos indicios del fenómeno de “colusión interpartidaria” descrito por Mair y Katz? ¿Es posible observar algunas de las condiciones, mencionadas por los autores, que facilitan su desarrollo? El que una de las condiciones mencionadas por estos autores, la de una cultura política marcada por una

²³ El PAN, aduciendo que se trató de un “error de cálculo” de las autoridades electorales (Reveles, 2002: 34), decidió devolver a la Tesorería de la Federación el 39% del financiamiento que le fue asignado, mientras que el PRD optó por distribuir el 30% del monto que le correspondió a proyectos ajenos al partido (Borjas, 2003, T2: 123-4).

tradición de cooperación interpartidaria y de negociación, esté o no presente puede ser materia de debate. El “elevado nivel de oportunidades para el patrocinio y el control de los partidos” (es decir, para que los partidos controlen la distribución de cargos públicos) sí parece, en cambio, verificarse, en por lo menos un ejemplo significativo: el recientemente acordado sistema de “alternancia plural” para la elección de los titulares de los órganos de gobierno interno de la Cámara de Diputados. El fenómeno de la colusión se observa también en los intentos de los tres principales partidos por obstaculizar el desarrollo de los partidos minoritarios.

Hasta 1997, el PRI controlaba los principales órganos de gobierno interno de la Cámara de Diputados: la Comisión de Régimen Interno y de Concertación Política y la presidencia de la Mesa directiva. Ese año, PAN y PRD acuerdan democratizar el control de estos órganos y nombrar por consenso a quienes debían desempeñar las funciones principales (Borjas, 2003, T2: 152). Pero no es sino hasta el inicio de la LIX Legislatura (agosto de 2003), que los tres principales partidos llegan a un acuerdo para rotar entre ellos la presidencia de la Mesa directiva de la Cámara de Diputados.²⁴ Aunque el acuerdo no es respetado durante la LIX Legislatura, en agosto de 2006, al iniciar la LX Legislatura, el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Héctor Larios, vuelve a ofrecer la “alternancia plural” en la presidencia de los dos principales órganos de gobierno interno de la Cámara: la Junta de Coordinación Política y la Mesa directiva.²⁵ El acuerdo surte finalmente efecto en agosto de 2007, con la elección de la perredista Ruth Zavaleta como presidenta de la Mesa directiva para el segundo año de la legislatura.

Los tres principales partidos políticos se han puesto de acuerdo, por otro lado, para buscar consolidar su posición dominante en el sistema de partidos, endureciendo las reglas para el surgimiento y desarrollo de nuevos partidos. En 1996, aumentan a 2 por ciento el mínimo de votación para que un partido pueda conservar su registro y participar en la asignación de escaños de representación proporcional. La reforma

²⁴ El acuerdo, plasmado por escrito, dice: “Las distintas fuerzas políticas presentes en la Cámara de Diputados, con ánimo de pluralidad democrática, han coincidido en una propuesta común de integración de la mesa directiva de la misma, y con el propósito de crear un clima constructivo para la formación de acuerdos que beneficien a la sociedad, coinciden en mantener esa misma voluntad política en los siguientes años de ejercicio de esta legislatura, privilegiando y garantizando el consenso para la alternancia plural de la Cámara” (*La Jornada*, 30 de agosto de 2003).

²⁵ El coordinador de la fracción panista declaró a los medios: “Yo he comprometido que el PAN cederá el espacio que le corresponde a presidir la Junta de Coordinación Política al PRI y, además, he dejado muy claro al coordinador del PRD que un año presidirá el PRD, un año el PRI y un año el PAN, lo mismo que la mesa directiva” (*La Jornada*, 31 de agosto de 2006).

electoral de 2003 establece requisitos más estrictos para el surgimiento de nuevos partidos –aumenta el número de afiliados con que una Asociación Política Nacional debe contar para ser registrada como partido, así como el número de asambleas que ésta debe realizar– e impide a los partidos de reciente creación participar en frentes, coaliciones, o fusionarse con otros partidos.²⁶ En 2007, por último, una nueva reforma al Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales (Cofipe) obliga a los partidos que participan en candidaturas comunes a ir a la boleta electoral con su propio emblema, eliminando la posibilidad de coaligarse en un convenio en el que se indique el porcentaje de votos que corresponde a cada partido coaligado.²⁷

Efectos de la “cartelización”

¿Qué efectos tiene la creciente “cartelización” de los tres principales partidos políticos mexicanos sobre los programas y las ideologías partidarias? El partido-cártel refuerza y profundiza la tendencia del partido atrapa-todo a hacer a un lado las “grandes batallas ideológicas”: los programas de los partidos se hacen más parecidos y las campañas se orientan más hacia objetivos compartidos que hacia temas controvertidos (Mair y Katz, 1997: 111-2, 107), fenómenos que Kirchheimer ya había observado en su descripción del partido atrapa-todo.

No es extraño, en esas condiciones, que las funciones de los partidos relativas al desarrollo programático, la formación de militantes y la divulgación ideológica se estén volviendo, en el caso de los tres principales partidos políticos mexicanos, crecientemente irrelevantes, como lo advierte Luis Giménez-Cacho, quien observa una “persistente disminución” de los gastos de los partidos en las actividades vinculadas con esos rubros (2003: 67). Los informes anuales de los partidos ponen en evidencia, en efecto, que los gastos de los partidos en “educación y capacitación”, “investigación socioeconómica y política” y en “tareas editoriales” (rubros que los informes engloban en la categoría de “actividades especiales”) se han reducido fuertemente en los últimos

²⁶ “Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos del COFIPE”, en *Diario de los debates de la Cámara de Senadores*, sábado 27 de diciembre de 2006, año I, I^{er} periodo extraordinario, LIX Legislatura, n°1.

²⁷ “Proyecto de decreto por el que se expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales”, en *Diario de los debates de la Cámara de Senadores*, miércoles 5 de diciembre de 2007, año II, I^{er} periodo extraordinario, LX Legislatura, n°31.

años,²⁸ ello “a pesar de que la ley prevé un incentivo: que el 75 por ciento de lo gastado en ese renglón puede ser reembolsado a los partidos en el año siguiente” (*ídem*).

CONCLUSIONES

Los modelos de partido atrapa-todo y de partido cártel sí parecen tener alguna pertinencia para describir las transformaciones que han experimentado los tres principales partidos políticos mexicanos a lo largo de las últimas cuatro décadas.

Como resultado de una serie de reformas político-electorales, las oposiciones al PRI, que muestran, durante la década de 1970, algunos rasgos antisistémicos, experimentan, durante las siguientes dos décadas, un proceso de creciente integración al sistema político. La primacía que los tres partidos otorgan a la participación electoral los lleva, por otro lado, a buscar la diversificación de sus electorados y a adoptar algunos de los principales rasgos del partido “atrapa-todo”.

El PRI, que en sus orígenes, y de manera más marcada durante la década de 1930, busca constituirse en un partido de masas y en el representante de la clase trabajadora, se convierte rápidamente, tras la experiencia cardenista, en una organización pluriclasista. El PAN, que surge como partido de cuadros, con una membresía reducida y una base social homogénea, se propone, a partir de finales de la década de 1970, abrirse a diversos sectores de la población e incrementa en forma espectacular el número de sus afiliados. El PRD, que nace como un proyecto de partido de masas, con una fuerte vinculación con las organizaciones y los movimientos sociales, diversifica su área de atracción social, buscando el apoyo de las clases medias e, incluso, de los empresarios, “grandes y pequeños”.

Con el rápido crecimiento, a partir de la década de 1990, del financiamiento público, los tres principales partidos políticos mexicanos empiezan a mostrar rasgos que los acercan a otro modelo de partido: el partido-cártel. Los tres muestran, en efecto, un grado de dependencia abrumador de los recursos del Estado, y los tres parecen dar muestras, en los órganos legislativos, de disposición a actuar en “colusión” unos con otros. Muestra de ello son el empleo del sistema de “alternancia plural” que permite la

²⁸ Los informes anuales de los partidos pueden ser consultados en www.ife.org.mx.

rotación de PRI, PAN y PRD en la presidencia de los dos principales órganos de gobierno interno de la Cámara de Diputados, y el acuerdo para garantizar y consolidar su posición dominante en el sistema de partidos, obstaculizando el surgimiento y desarrollo de nuevos partidos.

Las tesis del partido atrapa-todo (Kirchheimer) y del partido-cártel (Mair y Katz) permiten establecer una relación entre este cambio en la naturaleza de las organizaciones partidarias y la evolución de las concepciones ideológicas y programáticas de los partidos mexicanos. La transición hacia esos modelos se acompaña, en efecto, como lo afirma Kirchheimer, de una desradicalización y una desideologización que conduce, en palabras de Mair y Katz, al desvanecimiento de la especificidad ideológica y programática de los partidos y a un creciente consenso en materia de políticas públicas.

BIBLIOGRAFÍA

Alcocer, Jorge. 1993. “La tercera refundación del PRI”, *Revista Mexicana de Sociología*, núm. 2, abril-junio. México: Instituto de Investigaciones Sociales.

Arrieta Cenicerros, Lorenzo. 2005. “Continuidad de las prácticas corporativas del PRI. Presencia política y social de su sector obrero”, en Francisco Reveles. *Los partidos políticos en México. ¿Crisis, adaptación o transformación?*. México: Gernika.

Baena Paz, Guillermina. 2003. “La participación de las bases en el Partido Revolucionario Institucional”, en Francisco Reveles (coord.). *PRI, crisis y refundación*. México: Gernika.

Borjas Benavente, Adriana. 2003. *Partido de la Revolución Democrática: estructura, organización interna y desempeño público, 1989-2003*. México: Gernika (dos tomos).

Caul, Miki y Mark Gray. 2002. “From Platform Declarations to Policy Outcomes. Changing Party Profiles and Partisan Influence Over Policy”, en R. J. Dalton y M. P. Wattenberg (eds.). *Parties Without Partisans. Political Change in Advanced Industrial Democracies*. Oxford: Oxford University Press.

Centeno, Miguel Ángel. 1997. *Democracy Within Reason*. Filadelfia: Pennsylvania University Press.

Combes, Hélène. 2004. *De la politique contestataire à la fabrique partisane. Le cas du Parti de la Révolution Démocratique au Mexique (1989-2000)*. París : Universidad de París-III (tesis doctoral).

Córdova, Arnaldo. 1998. *La política de masas del cardenismo*. México: Era.

Furtak, Robert. 1974. *El Partido de la Revolución y la estabilidad política en México*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Garrido, Luis Javier. 1986. *Partido de la Revolución Institucionalizada. La formación del nuevo Estado en México*. México: Secretaría de Educación Pública–Editorial Siglo XXI.

Gilly, Adolfo. 1988. “Partido”, *La Jornada*, 21 de septiembre.

Giménez-Cacho, Luis. 2003. “La hora de las cuentas. Para saber cómo gastan los partidos”, en *Configuraciones*, año 2, núm. 12-13, abril-septiembre. México: Fundación Carlos Pereyra.

Johansson, Steven. 2012. “La distancia ideológica entre los tres principales partidos políticos mexicanos (1976-2006”, *Estudios Políticos*, Nueva Época, núm. 26, mayo-agosto. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Kirchheimer, Otto. 1980. “El camino hacia el partido de todo el mundo”, en K. Lenk y F. Neumann (eds.). *Teoría y sociología crítica de los partidos políticos*. Barcelona: Anagrama.

Lipset, Seymour. 1968. “The Modernization of Contemporary European Politics”, en *Revolution and Counterrevolution. Change and Persistence in Social Structures*. Nueva York: Basic Books.

Loaeza, Soledad. 1999. *El Partido Acción Nacional: la larga marcha, 1939-1994*. México: Fondo de Cultura Económica.

Lujambio, Alonso. 2003. "México", en M. Carrillo, A. Lujambio, C. Navarro y D. Zovatto (coords.). *Dinero y contienda político-electoral. Reto de la democracia*. México: Instituto Federal Electoral-Fondo de Cultura Económica.

Mair y Katz. 1997. "Party Organization, Party Democracy, and the Emergence of the Cartel Party, en Peter Mair (ed.). *Party System Change, Approaches and Interpretations*. Oxford: Clarendon Press.

Michels, Robert. 1969. *Los partidos políticos*. Buenos Aires: Amorrortu Editores (2 tomos).

Mizrahi, Yemile. 1996. "Los empresarios panistas", *Estudios Sociológicos*, vol. 14, núm. 41. México: El Colegio de México.

Offe, Klaus y Volker Ronge. 1982. "Theses on the Theory of the State", en David Held y Anthony Giddens (eds.). *Classes, Power and Conflict*. Los Angeles: University of California Press.

Prud'homme, Jean-François. 1998. "Las plataformas electorales de los partidos en 1997", en Luis Salazar (coord.). *1997: Elecciones y transición a la democracia en México*. México: Cal y Arena.

Przeworski, Adam e Immanuel Wallerstein. 1988. "Structural Dependence of the State on Capital", en *American Political Science Review*, vol. 82, núm. 1, marzo. Denton: University of North-Texas.

Reveles, Francisco. 2003. *Partido Acción Nacional: los signos de la institucionalización*. México: Universidad Nacional Autónoma de México-Gernika.

Reveles, Francisco (coord.). 2005. *Los partidos políticos en México: ¿crisis, adaptación o transformación?*. México: Universidad Nacional Autónoma de México-Gernika.

Rodríguez Araujo, Octavio (coord.). 1996. *Transición a la democracia, diferentes perspectivas*. México: La Jornada Ediciones-Universidad Nacional Autónoma de México.

Rodríguez Araujo, Octavio. 1998. “En búsqueda de un régimen alternativo”, en Guillermo Almeyra y otros. *La transición difícil*. México: La Jornada Ediciones.

Sánchez, Marco Aurelio. 1999. *PRD: la élite en crisis. Problemas organizativos, indeterminación ideológica y deficiencias programáticas*. México: Plaza y Valdés.

Sassoon, Donald. 1997. *Looking Left. European Socialism After the Cold War*. Londres: I. B. Taurus.

Schmidt, Manfred. 1996. “When parties matter: A Review of the Possibilities and Limits of the Partisan Influence on Public Policy”, en *European Journal of Political Research*, núm. 30. Amsterdam: Elsevier.

Thomas, John Clayton. 1980. “Ideological Trends in Western Political Parties”, en Merkl, P. H. (ed.). *Western European Party Systems*. Nueva York: Free Press.

Ware, Alan. 2004. *Partidos políticos y sistemas electorales*. Madrid: Istmo.

Woldenberg, José. 2002. *La construcción de la democracia*. México: Plaza y Janés.